

«Esta es Colombia, Pablo»

Javier Sanín, SJ*

HACE décadas, al recibir en Bogotá a Pablo Neruda, un poeta criollo acuñó la frase que sirve de título a este artículo, como estribillo para rematar las descripciones que se hacían en el poema de la Colombia de entonces. El panorama no ha cambiado mucho, en cuanto a violencia, pobreza, conflictos: sólo que nuevos elementos han aparecido para complicar la situación y que la intensidad de las luchas ha desbordado todos los límites, hasta llegar el país a ser caracterizado como el más sangriento del mundo, el mayor violador de los Derechos Humanos en el continente y el paraíso del narcotráfico. Sin que, por supuesto, toda la población participe de semejantes atrocidades, y buena parte de ella trate por todos los medios de superar las Siete Plagas que han caído sobre la sociedad civil. Esta es Colombia, Pablo.

Colombia —cuyo nombre deriva del Descubridor— es la segunda democracia más antigua del continente americano —después de USA— de funcionamiento casi ininterrumpido. Una excepción en América Latina: sin tradición militar golpista, sin procesos de transición a la democracia,

* Director de *Revista Javeriana*. Bogotá-Colombia.

con una economía legendariamente sana, sin endeudamiento externo de-estabilizante y sin hiperinflación.

Sus estructuras políticas corresponden a los mandatos de los manuales: estado social de derecho, separación de poderes, códigos, tribunales, elecciones periódicas, prensa libre. Sin embargo, pocas instituciones funcionan satisfactoriamente, la pobreza crece, la violencia alcanza límites inimaginables, la violación cotidiana de los Derechos Humanos es desahogada y el narcotráfico parece influir demasiado en la situación interna y externa del país, hasta el punto de ser acusado por funcionarios de la DEA de ser la primera narcodemocracia del mundo.

La estabilidad política de Colombia contrasta con la inestabilidad de la vida cotidiana. La estabilidad macroeconómica, con la estabilidad microeconómica de los habitantes. La estabilidad de su democracia, con la inestabilidad que suponen varias guerras cruzadas simultáneas que se libran en su territorio. La estabilidad jurídica, con la inestabilidad de todos los derechos ciudadanos, la impunidad rampante, la corrupción corrosiva y la delincuencia común.

Continuidad del sistema

PARA muestra, un botón: durante 1994 los colombianos concurren a las urnas cuatro veces: para elegir Congreso —constituido por dos cámaras, una nacional y otra regional—, presidente de la República —a la mayoritaria en dos vueltas—, y para mandatarios y cuerpos colegiados regionales y locales. Sólo entre el 30 y 40 por 100 de los electores potenciales utilizaron las urnas, para consagrar mayoritariamente funcionarios del Partido Liberal, que se ha convertido en una especie de PRI a la colombiana, y del conservador, que va a la zaga desde los años treinta. El monopolio liberal se volvió a consagrar con la elección, de entre sus filas, del presidente Samper —quien venció a Andrés Pastrana por 155.000 votos—, del 60 por 100 de los integrantes de las cámaras y más de la mitad de los alcaldes y gobernadores.

Por elecciones del Congreso y otras instancias, también el liberalismo preside los organismos de control, designa los directivos de las empresas estatales y maneja los cuerpos armados y de inteligencia desde el nivel nacional hasta el último rincón del país.

Continuidad del contrasistema

PARALELO al sistema legal, en una complicada urdimbre de procesos internacionales, nacionales, regionales y locales que implican la totalidad del territorio, se desenvuelve un sistema ilegal, que se entremezcla con el legal para producir varias guerras simultáneas, influir en el aparato político y jurídico, determinar la economía y ser responsable de buena parte de la violencia y la violación de los derechos humanos.

De una parte están, desde hace cuarenta años, las guerrillas que surgieron al amparo del marxismo-leninismo de los sesenta, reunidas en el Ejército de Liberación Nacional, dirigido por el cura Pérez, un español que llegó a las barriadas bogotanas en los comienzos de dicha década y terminó comandando la más agresiva organización armada. De otra, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, movimiento heredero de las guerrillas liberales de los años cincuenta, convertidas al marxismo y comandadas por un legendario campesino. Ambas fuerzas, convergentes en la Coordinadora Nacional Guerrillera para efectos tácticos y estratégicos, actúan en todo el territorio, influyen en la elección del Congreso y de una tercera parte de los alcaldes, controlan las zonas de productos de exportación —oro, banano, petróleo— y participan directa e indirectamente en los negocios de cocaína y heroína. Poseedoras de enormes fortunas, conseguidas con el chantaje, la extorsión y la droga, derivan paulatina-mente hacia la banditización, sin perder sus bases sociales y sus enclaves políticos en los campos, ya que ninguna de las dos ha logrado implantación urbana.

Los narcotraficantes, y su violencia de tipo terrorista o común, son primordialmente urbanos, pero dominan una tercera parte de las mejores tierras cultivables, y sus intereses —por cultivos, sitios de laboratorios o de embarque de droga—, coinciden en los territorios manipulados por las guerrillas, lo cual origina diversas alianzas o choques con ellas según la región. A los anteriores grupos, se suman los paramilitares de ambos bandos —encargados de la guerra sucia—, el ejército y la policía oficial (no exentos de la corrupción imperante), la delincuencia común y los hombres en armas de diversas procedencias. Lo cual hace invivible el campo colombiano, en permanente pie de guerra, y anima el éxodo continuo hacia las ciudades de los campesinos desprotegidos, que van a engrosar las

multitudes de barrios subnormales que circundan las grandes ciudades y las intermedias.

La delincuencia urbana y los grupos de «limpieza social» completan el cuadro de la violencia. La inseguridad en las calles es total. Asaltos, atentados, homicidios, robos, etc., hacen que empiecen a surgir grupos armados de autodefensa en los barrios, contra los ladrones de coches, o contra los drogadictos y facinerosos. Sin que el gobierno consiga imponer la autoridad, ni desarmar a la población, ni encontrar figuras de castigo eficientes.

El resultado: Colombia tiene el dudoso privilegio de ser el país que, no estando en guerra declarada, pues oficialmente no está en guerra, tiene los más altos índices de muertes y crímenes por cada cien mil habitantes en el planeta. Anualmente, según las manipuladas cifras oficiales, treinta y tantos mil colombianos son asesinados, siendo ésta la principal causa de muerte, por encima del cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Ningún otro país se le aproxima siquiera en cantidad de secuestros, desaparecidos, heridos y damnificados.

El contrasistema es también demasiado poderoso económicamente, tanto por los capitales que manejan las guerrillas, como por los que aportan a la economía los ingresos del narcotráfico, que irrigan mucha de la actividad en la construcción, hotelería y ganadería del país. Un cambio en las reglas del juego para disminuir la violencia, implicaría también variaciones en el tratamiento de legalización de capitales guerrilleros y narcotraficantes.

Sin soluciones a la vista

CADA vez que el sistema político se ha visto amenazado, recurre al diálogo con las guerrillas, que culmina con amnistía y reintegración. Así ha sucedido cinco o seis veces en los cuarente años pasados, con lo cual logró el desarme de las guerrillas liberales, del M-19 y de varios grupos armados regionales, pequeños y sin mayor incidencia nacional. Pero el esquema parece agotado cuando se trata de aplicarlo a las poderosas fuerzas de la Coordinadora, y por el poco interés en la pacificación manifestado tanto por los grupos en armas como por los narcotraficantes —temerosos de que si las guerrillas se desactivan, el poder del Estado les caerá a ellos—, las potencias empeñadas en combatir el narcotráfico independientemente de las guerrillas en los países produc-

tores y comercializadores, y las fuerzas armadas que con la actual situación absorben casi la tercera parte del presupuesto de la nación. Cuando tanta gente vive de la guerra, y tres actores se neutralizan uno a otro, es muy difícil detenerla si no hay acuerdo entre todos ellos, si el Estado no tiene autoridad y la sociedad civil no es lo suficientemente fuerte como para exigir la paz. Factores que no se presentan en la Colombia actual.

El presidente Samper se ha mostrado proclive al diálogo, ha nombrado un prestigioso político liberal para asumir las negociaciones y ha empezado a moverse en un modelo semejante al salvadoreño para buscar la paz: adopción por el Congreso del Protocolo II de Ginebra, reconocimiento de la desaparición forzada como delito, reinterpretación del fuero militar, secreto en las conversaciones y posibilidad de admitir mediadores extranjeros, sin que hasta el momento las guerrillas respondan adecuadamente a los esfuerzos presidenciales. Éstos no consideran en el plan a los paramilitares ni a los narcotraficantes. A los primeros no se les reconoce existencia. Con el narcotráfico se continúa con la política de sometimiento llevada a cabo por el expresidente Gaviria, que consiste en favorecer la entrega del delincuente —no sujeto en ningún caso a extradición por norma constitucional—, negociación de penas y rebajas en ellas, que hasta el momento ha sido exitosa en cuanto ha disminuido el terrorismo, pero no la exportación clandestina de alcaloides.

El contexto internacional

LA presión internacional empieza a ser fuerte. Tanto por la violación de los derechos humanos, como por el tratamiento a guerrilleros y narcotraficantes, el país está en la mira. Y en un atolladero. Se le aísla justificadamente por la violación estatal de los derechos, pero nadie interviene para que no lo haga la guerrilla, todavía dotada fuera de Colombia del hálito liberador y de «izquierda» de los sesenta. Se le ataca por el narcotráfico, pero nadie se atreve en los países consumidores a frenar el consumo. Se le amenaza con sanciones económicas, con lo que prescindir de los dólares del narcotráfico sería un suicidio. Se le sataniza como único responsable del tráfico, pero no se ataca a las instituciones responsables del lavado de divisas. El reciente triunfo de los republicanos en USA y su dominio sobre el todopoderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado amenaza con volver enormemente perjudicial para Colombia el dilema del narcotráfico internacional, contex-

tualizado en unas políticas que han probado ser absolutamente ineficaces para controlarlo, pero sumamente eficientes para acrecentar la violencia y la ilegalidad en el país.

Estabilidad macroeconómica

COLOMBIA fue el último país latinoamericano en adoptar las medidas de apertura económica que caracterizaron a las economías a finales de los ochenta, para integrarse plenamente en la internacionalización. Por lo cual el proceso ha sido más rápido y el ajuste más notorio que en otras repúblicas. En escasos tres años la economía se liberalizó totalmente, la pobreza cubrió a la mitad de la población, dejando a un 25 por 100 en la pobreza absoluta, creció desmesuradamente la informalidad y la moneda no ha dejado de revaluarse intensamente perjudicando las exportaciones. Sin que por ello se haya convertido en una tentación para la inversión extranjera. Ni para la nacional. Lo que no obsta para que atesore divisas, pague cumplidamente sus deudas y goce de un auge económico envidiable, gracias al precio del café, a la apertura del comercio y a la bonanza petrolera en lo legal y a la libertad absoluta de cambio de divisas en lo ilegal.

El comercio regional, especialmente con Venezuela, se ha multiplicado en los dos últimos años. Las reservas petroleras y las nuevas explotaciones le auguran al país un horizonte despejado hasta entrado el siglo venidero. Los tratados internacionales con el Caribe, Centro América y México, le están abriendo puertas intocadas a la red comercial del continente, al igual que las preferencias —por su lucha contra el narcotráfico— en la Comunidad Europea y USA le dan ventajas arancelarias en estos mercados, no siempre acatadas, como en la venta de bananos.

La política internacional del país es nítida: el reto es marginalizar los ingresos por narcotráfico, de tal manera que se minimicen, multiplicando los del comercio legal. Pero, para ello, hace falta que los socios multilaterales tomen medidas contra el consumo, el blanqueo y la inversión de dinero proveniente del narcotráfico. Mientras ello no se logre, Colombia seguirá en solitario su lucha contra la adversidad.

«Esta es Colombia, Pablo». Un país con todas las posibilidades, sorprendido entre las rejas de su propia violencia, cercada internacionalmente, asfixiada por la intensidad de sus conflictos ancestrales e incapaz de remontarlos.